



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-004-2015-00424-01
Demandante:	María Yancelly Villa
Demandado:	Porvenir S.A.
Interviniente ad excludendum:	María Patricia Osorio Morales
Asunto:	Apelación y Consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes compañeras permanentes

Medellín, agosto nueve (9) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, con salvamento de voto, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de febrero de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MARÍA YANCELLY VILLA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

PORVENIR S.A., proceso al cual fue vinculada como interviniente ad excludendum la señora MARÍA PATRICIA OSORIO MORALES, Radicado 05001-31-05-004-2015-00424-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora MARÍA YANCELLY VILLA, convocó a juicio a PORVENIR S.A. y a MARÍA PATRICIA OSORIO MORALES, pretendiendo se declare que le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su compañero permanente, Alejandro Álvarez, en un 50%, desde el 6 de agosto del 2008 y que la misma le sea incrementada al 100%, una vez se le suspenda la prestación a los jóvenes Alejandro Álvarez Villa y Carlos Andrés Álvarez Osorio, hijos del causante; se reconozcan intereses moratorios e indexación.

En respaldo de tales pedimentos, expuso que convivió con el causante desde el 8 de febrero del 2002 hasta el 6 de agosto del 2008, fecha de la muerte de éste, estando en embarazo para cuando el mismo fallece, naciendo su hijo Alejandro Álvarez Villa, por lo que reclamó la pensión de sobrevivientes en nombre propio y en el de su hijo, siendo reconocido el 25% a su hijo y el otro 25% al otro hijo de su compañero, joven Carlos Andrés Álvarez, el 50% restante fue reconocido a la señora María Patricia Osorio Morales, pese a que, de las investigaciones realizadas, se podía concluir que era la hoy reclamante, la verdadera compañera del afiliado y no la señora Osorio Morales. Agregó que la demandada, sin contar con prueba sumaria, suspendió el 50% de la prestación que le correspondía a la accionante, como compañera permanente.

1.2.- CONTESTACIÓN

Oportunamente **PORVENIR S.A.**, se pronunció respecto de la demanda, indicando que no es cierto el término de convivencia que se aduce, pues existe

declaración extra juicio rendida por la demandante, en la cual manifestó, bajo la gravedad del juramento, que convivió durante 2 años con el afiliado y que en ese momento estaba en embarazo, aunado a que cuenta con registro civil de matrimonio en el cual consta que el 14 de julio del 2006, se inscribió el matrimonio que contrajo con el señor Jhon Alexander Pinzón Perdomo.

Agregó que también presentó reclamación de pensión de sobrevivencia la señora María Patricia Osorio Morales, quien alega la calidad de compañera permanente del afiliado, por lo que la AFP no está en capacidad de dirimir la controversia que se presenta entre ambas reclamantes, por lo que se estará a lo que se defina en el proceso.

En su defensa presentó las excepciones de falta de causa para pedir; inexistencia de la obligación; buena fe; pago; hecho exclusivo de un tercero y prescripción.

Por su parte, **MARÍA PATRICIA OSORIO MORALES**, presentó demanda en contra de **PORVENIR S.A.**, solicitando se le reconozca la pensión de sobrevivientes, en su calidad de compañera permanente del señor Alejandro Álvarez Acosta, tal como lo acredita la sentencia proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Medellín, reconocimiento que solicita en un 50% y de manera vitalicia, desde el 6 de agosto del 2008, la que se deberá incrementar al 100%, una vez se le suspenda la prestación a los hijos del asegurado, junto con los intereses moratorios.

Como sustento de sus peticiones, expuso que convivió con Alejandro Álvarez Acosta, procreando a Carlos Andrés Álvarez Osorio, quien es mayor de edad y adelanta estudios universitarios, por lo que solicitaron la prestación de sobrevivencia, la cual le fue reconocida al joven Carlos Andrés, pero se dejó suspendida respecto de María Patricia Osorio Morales, solicitándosele, el 29 de mayo del 2009, aportara sentencia que declarara la unión marital de hecho, en la que se reconociera su calidad de compañera permanente del fallecido.

Explicó que el 6 de febrero del 2009, inició proceso de declaración de unión marital, reconociéndose la unión por providencia del 4 de marzo del 2010, proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Medellín, confirmada por el superior, radicándose ante la AFP las providencias el 23 de septiembre del 2010, indicando la entidad, el 20 de diciembre del 2011, que la sentencia aportada no era válida por cuanto en la misma no se había hecho partícipe a la señora María Yancelly Villa, quien también había solicitado la pensión, con quien debía llegar a un acuerdo conciliatorio para establecer tiempos exactos de convivencia y la distribución porcentual del derecho reclamado.

Agregó que a la fecha no se le ha reconocido la pensión de sobrevivientes, pese a que convivió con el afiliado fallecido por un término de 16 años.

De igual forma **PORVENIR S.A.** dio respuesta a la demanda presentada por la señora MARÍA PATRICIA OSORIO MORALES, expresando que si bien se le indicó a la referida reclamante que debía presentar la sentencia judicial, también es cierto que se le informó que no era posible reconocerla como beneficiaria de la pensión, por cuanto en el proceso de familia no intervino la María Yancelly Villa, quien también reclamó la pensión de sobrevivientes, aduciendo la calidad de compañera permanente, afirmando, además, que la declaración de la unión marital de hecho, no acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Insiste que la declaración de la unión marital de hecho es para fines patrimoniales y no para acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión, exigiéndose para ello la convivencia.

Propuso las excepciones de falta de causa para pedir; inexistencia de la obligación; buena fe; pago; hecho exclusivo de un tercero y prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 11 de febrero de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que María Patricia Osorio Morales, demostró convivencia, en calidad de compañera permanente con el causante, por un término superior a los 5 años, contados a la fecha del fallecimiento; declaró que María Yancelly Villa, no demostró convivencia con el fallecido en un término superior a los 5 años; ordenó a Porvenir S.A., proceder a entregar los valores dejados en reserva, para pagarlos en el 50%, junto con el acrecimiento, a la señora María Patricia Osorio Morales, acrecimiento que corresponde a la cuota que percibía el joven Carlos Andrés Álvarez Osorio, autorizando los descuentos en salud; absolvió a Porvenir S.A. de los intereses moratorios y la indexación, condenando en costas a María Yancelly Villa, en favor de María Patricia Osorio Morales.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Porvenir S.A.

El apoderado de la AFP interpuso recurso de apelación, concluyendo que no se pudo verificar la convivencia alegada por María Patricia Osorio Morales, teniendo presente que existen dos documentos que hacen referencia a una convivencia del causante por dos años con María Yancelly Villa, lo que sería suficiente, para desacreditar la convivencia de la señora Osorio Morales.

Solicita se realice un análisis detallado de las pruebas, de las cuales se establece que no existe una prueba sumaria que demuestre la efectiva convivencia entre la señora María Patricia Osorio Morales y el asegurado. Considera que el Juez tuvo como válida la sentencia del Juzgado de Familia, que fue confirmada por el superior, prueba que no es oponible ni a Porvenir S.A., ni a María Yancelly Villa, sin olvidar que hay un elemento objetivo en la pensión de sobrevivientes, que lo es los años de convivencia.

A su juicio quedan muchas lagunas respecto de la convivencia alegada por la interviniente con el señor Alejandro Álvarez Acosta, ya que la señora María

Yancelly Villa, demandante, hace referencia a que antes de convivir con ella causante convivía con su madre, considerando que hay más dudas que certezas en el proceso, ya que los testigos no fueron claros, resaltando que al proceso comparecieron personas diferentes a las que declararon en el Juzgado de Familia, lo que genera duda respecto de su versión.

Finalmente, insiste en que se debe acrecentar las mesadas a los hijos del causante, que son quienes en realidad tienen derecho a la prestación.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de Porvenir S.A. y de la interviniente María Patricia Osorio Morales. El apoderado de Porvenir S.A. iteró que, no se logró probar la convivencia efectiva entre el afiliado y las demandantes, ello por cuanto los testigos no fueron consecuentes en sus dichos, acusaban generalidad y poco conocimiento de las preguntas básicas, por lo que se deberá acrecer la mesada de los hijos del causante en un 25% a cada uno de ellos, solicitando en consecuencia se confirme la providencia de primera instancia.

La apoderada de la interviniente, señora María Patricia Osorio Morales, solicitó se confirmara la providencia de primera instancia, al quedar acreditado que su representada convivió con el afiliado por un espacio superior a los 15 años, reiterando que la demandante no logró acreditar la convivencia alegada, manejando a su amaño la prueba a efectos de acreditar la misma.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes

quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.*”

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Alejandro Álvarez Acosta, falleció el 6 de agosto del 2008, tal y como se desprende del registro civil de defunción obrante en el *documento 01 Expediente.pdf folios 32 a 33* del plenario.
- Que el joven Alejandro Álvarez Villa, quien nació el 16 de marzo del 2009, es hijo de la demandante y del causante, tal y como se desprende del registro civil de nacimiento, obrante en el *documento 01 Expediente.pdf folios 25 a 26* del plenario.
- Que Porvenir S.A., reconoció la sustitución pensional en favor de los hijos del asegurado, Carlos Andrés Álvarez Osorio y Alejandro Álvarez Villa, en un 25% para cada uno de ellos, a partir del 6 de agosto del 2008 –ver *documento 01 Expediente.pdf folios 28 a 29* del plenario-,

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la providencia de primera instancia, para en su lugar ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia en favor de la accionante, verificando, de igual forma, si la señora María Patricia Osorio Morales, interviniente ad excludendum, acredita la calidad de compañera permanente del afiliado fallecido y el tiempo mínimo de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la prestación?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, ni la demandante, señora María Yancelly Osorio, ni la interviniente, María Patricia Osorio Morales, acreditaron la calidad de compañeras permanentes respecto del causante, para ser beneficiarias de la prestación de sobrevivencia, toda vez que no se demuestra el requisito de la convivencia por el término de cinco años al momento del deceso, exigida en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003; en consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

Como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente a la fecha del óbito del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 Jun 2009, SL 42828 del 1º Feb 2011, SL 7358 (46780) del 23 jun 2014 y más recientemente la sentencia SL 529 de 2021.

El artículo 13 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha del fallecimiento del señor Alejandro Álvarez Acosta, establece quienes son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia:

“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. *Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).”

2.6.- CASO CONCRETO

En el sublite, no hay controversia en torno a la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, en tanto que Porvenir S.A., reconoció la prestación en favor de los hijos del asegurado, Carlos Andrés Álvarez Osorio y Alejandro Álvarez Villa, en un 25% para cada uno de ellos, a partir del 6 de agosto del 2008 –ver *documento 01 Expediente.pdf folios 28 a 29* del plenario-, siendo el punto de discusión, determinar si la actora y/o la interviniente ad excludendum, ostentaban la calidad de beneficiarias de la prestación.

Al respecto, se tiene que tanto la demandante, señora María Yancelly Villa, como la interviniente ad excludendum, señora María Patricia Osorio Morales, tiene la carga probatoria de acreditar la calidad de compañera permanente y la convivencia efectiva en un periodo mínimo de cinco años con anterioridad a la muerte del señor Alejandro Álvarez Acosta, recordando que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la Sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018 (45779), definió la convivencia así:

“2.1 La noción de convivencia

...Por convivencia ha entendido la Corte que es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605).”

María Yancelly Villa

Atendiendo al grado jurisdiccional de consulta en el cual se conoce, en favor de la señora María Yancelly Villa, analizada en su conjunto la prueba aportada, encuentra la Sala, las conclusiones a las cuales llegó el a quo, en torno a que la misma no logró acreditar convivencia con el afiliado, en los 5 años anteriores a su muerte, por las razones que se pasan a explicar.

i) Se comienza por indicar, que está acreditado que la demandante contrajo matrimonio el 14 de julio del 2006, dos años antes del fallecimiento del causante, con un tercero, el señor Jhon Alexander Pinzón Perdomo, tal y como se desprende del registro civil de matrimonio obrante en el documento 01 Expediente.pdf folio 112 del plenario.

Frente a esta situación, adujo la accionante, en su interrogatorio de parte, que Jhon Alexander Pinzón Perdomo, fue una persona con la que se casó, ya que pensaba salir del país con el causante y éste les iba a ayudar, afirmando que fue un matrimonio que no duró más de 2 meses y se divorció, precisando que nunca convivió con él.

Llama la atención la poca información que da la señora María Yancelly Villa, sobre este aspecto tan importante de su vida, encontrando que no logra dar las explicaciones razonables, sobre la manera en la que presuntamente le iba a ayudar el señor Pinzón Perdomo para su viaje al exterior, sin que precise a que

país y como ello podría facilitar el viaje del causante, aunado al hecho que no aportó con la demanda, ni para el momento de la audiencia, como se lo solicitó el a quo, la prueba relacionada con el divorcio con el cual se dio por terminado ese vínculo, sin recordar siquiera la fecha en que ello ocurrió.

Además, los testigos allegados por la activa, señores Julio Jader Guzmán Acevedo y Paola Andrés Mejía Villa, mejor amigo del causante y sobrina de la demandante, respectivamente, afirmaron, bajo la gravedad del juramento, ser cercanos a su núcleo familiar, pero niegan conocer del matrimonio que contrajo la actora en el año 2006, aunado al hecho que su hermana, María Edilia Restrepo Villa, declaró, de manera vaga, que la actora sí se casó por un viaje, por unos documentos, pero que no sabe bien como fueron las cosas, ya que fue un matrimonio por conveniencia, precisando que el causante sabía de eso y que ella no le prestó mucha atención a esa situación.

ii) Así mismo, se anexó declaración extraproceso rendida por el causante el 25 de julio del 2008, días antes de su fallecimiento, en la que indicó que vivía bajo el mismo techo, en unión libre desde hacía 2 años, con María Yancelly Villa, a quien sostenía económicamente, registrando como domicilio el barrio la Milagrosa, documento que aparece suscrito también por la demandante –ver *documento 01 Expediente.pdf folios 358 a 359* del plenario-.

Sobre este documento, adujo la actora, en su interrogatorio de parte, que lo hicieron para que el fallecido la pudiese afiliar a la EPS como su beneficiaria, sin saber por qué pusieron solo dos años de convivencia en ese momento, en este mismo sentido obra certificación expedida por Susalud, el 5 de agosto del 2008, en la que se indica que la señora María Yancelly Villa, estuvo afiliada a dicha entidad, en su calidad de compañera permanente, apareciendo como fecha de ingreso el 30 de julio del 2008, 5 días después de rendida la declaración extrajuicio –ver *documento 01 Expediente.pdf folio 364* del plenario-.

Frente al contenido de esta declaración, la misma tiene pleno valor probatorio, al provenir del afiliado fallecido y presentarse ante autoridad notarial, no pudiendo la actora valerse del contenido de la misma, solo en el fragmento que le favorece, esto es, en cuanto a que el causante validó la existencia de la unión de hecho, pero desconociendo el tiempo de convivencia contenido en la misma.

iii) Finalmente se cuenta con declaración extraproceso rendida por la señora María Yancelly Villa, el 8 de octubre del 2008, quien indicó que vivía en unión libre y bajo el mismo techo con Alejandro Álvarez Acosta, que convivieron durante 2 años, que estaba en embarazo y dependía de los ingresos de su compañero, que su pareja tenía un hijo de 15 años y respondía por él –ver *documento 01 Expediente.pdf folio 279* del plenario-.

Nótese que esta última declaración, concuerda con la rendida por el causante, en cuanto al término de dos años de convivencia se refiere, no ajustándose a las reglas de la experiencia y la sana crítica, que la reclamante exprese que para el causante y para ella, no tenía relevancia el tiempo de convivencia que se consignó en ese documento, pues no tiene justificación que teniendo una convivencia superior a cinco años se exprese bajo juramento que solo llevaban dos años de convivencia.

Por lo anterior, es claro que la demandante no logró acreditar una convivencia con el causante, superior a los dos años que ambos convivientes declaran, la cual incluso pudo ser menor teniendo en cuenta que la pareja declara que convivió del 25 de julio de 2006 al 25 de julio de 2008 y el matrimonio de la demandante se cumplió el 14 de julio de 2006, el cual afirma duró dos meses, no cumpliéndose en todo caso el requisito de cinco años de convivencia exigido en la ley, para acceder a la prestación deprecada.

María Patricia Osorio Morales

Para desatar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la AFP accionada, se remite la Sala al material probatorio obrante en el plenario a fin de determinar, si en efecto, la señora María Patricia Osorio Morales, satisface los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia.

En este cometido, se anticipa, que, a juicio de este Juez Plural, la decisión adoptada por el fallador de primera instancia, no resulta acertada, en tanto que la interviniente ad excludendum, tampoco logra acreditar una convivencia ininterrumpida por un espacio superior a cinco años con el causante para el momento de la muerte.

Sobre la convivencia alegada, se tiene que la señora Osorio Morales, rindió su interrogatorio, negando que el causante hubiere convivido con persona diferente a ella, explicando que convivieron siempre en el barrio el Santander y desconociendo la existencia de la señora María Yancelly Villa, ya que afirma el mismo siempre durmió en la casa que compartían, indicando que fue solo después de fallecido, que supo que había otra persona que afirmaba ser la compañera de Alejandro, esto es, la señora María Yancelly Villa, a quien le entregaron la mitad de la liquidación de las prestaciones sociales del mismo.

Ahora, en cumplimiento de su carga probatoria, la interviniente allegó dos testigos a la audiencia de trámite y juzgamiento, el primero de ellos, fue el señor Fredy Alejandro Guzmán, quien también vive en el barrio Santander y se dedica a la conducción de un taxi, aduciendo conocer a la señora María Patricia y al causante, desde que eran pequeños, afirmando una convivencia de la pareja desde el año de 1998, de manera permanente, lo que adujo saber, porque transportaba a Carlos Andrés, su hijo, primero a la guardería y luego al colegio, además que en algunas ocasiones transportó al causante y a María Patricia, 2 o 3 veces por semana, lo que se dio antes del afiliado conseguir carro, como en el año 2006.

Continuó indicando el testigo, que veía al causante llegar todos los días a la casa de María Patricia, lo que justifica en el hecho que pasaba por ahí y veía el carro parqueado afuera de la casa.

También rindió declaración la señora Luz Stella López Bedoya, amiga de María Patricia Osorio Morales, quien vive a cinco casas de la interviniente, dando cuenta de una convivencia de la pareja, desde 1992, indicando que la convivencia fue hasta el día de la muerte del afiliado, viéndolo en la casa que compartía con María Patricia, todos los días salir y entrar.

Frente a las declaraciones referenciadas previamente, debe indicarse, que no logran brindar certeza, sobre la convivencia permanente e ininterrumpida de la señora María Patricia Osorio Morales y el señor Alejandro Álvarez Acosta, en los extremos alegados por la reclamante, ya que, si bien es cierto, la señora Luz Stella López Bedoya, aduce que veía diario al causante entrar y salir de la casa que, según ella, compartía con la señora María Patricia, ello no es indicativo de convivencia.

Ahora, atendiendo a los principios de la lógica y la sana crítica, no resulta creíble que una vecina, pueda dar fe que lo que hacía diariamente el causante, durante dieciséis años, como tampoco el hecho de que el señor Fredy Alejandro Guzmán, viera el carro del causante parqueado afuera de la casa en la que se aduce vivía la señora María Patricia Osorio Morales, es prueba inequívoca de la convivencia, siendo ambos testigos externos al núcleo familiar

De otro lado, no cuenta la señora María Patricia Osorio Morales, con otras pruebas que permitan sustentar la convivencia alegada por la misma, máxime si se tiene en cuenta que no se solicitó el testimonio de ningún miembro del grupo familiar del causante y que no hay prueba que conduzca a concluir una convivencia simultánea, la cual niega la misma interviniente.

En este escenario debe la Sala darle fuerza probatoria a la prueba documental consistente en la declaración extraproceso del propio causante que desvirtúa la prueba testimonial de la interviniente, instrumento con el cual se acredita que para el momento de la muerte éste convivía con la señora María Yancelly Villa y no con la señora María Patricia Osorio.

De otra parte, si bien es cierto que por sentencia del 4 de marzo del 2010, el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín, declaró la existencia de la unión marital de hecho entre los señores María Patricia Osorio Morales y Alejandro Álvarez Acosta, a partir del 15 de noviembre de 1993 y hasta el día del fallecimiento del compañero permanente, ocurrida el 6 de agosto del 2008; declaró que entre los señores referidos, existió sociedad patrimonial entre compañeros permanentes –ver *documento 01 Expediente.pdf folios 94 a 108* del plenario, decisión que fue confirmada parcialmente el 23 de agosto del 2010, por la Sala Quinta de Decisión de Familia, del Tribunal Superior de Medellín– ver *documento 01 Expediente.pdf folios 82 a 90* del plenario, no puede desconocerse que dicho proceso no es oponible a la demandante.

En adición a lo anterior, se precisa que el juez del trabajo debe resolver la prestación con apoyo en la prueba obrante en el juicio laboral determinando la convivencia efectiva entre la pareja, pudiendo apartarse de la decisión de la jurisdicción ordinaria de familia, cuando, como en este caso, la evidencia indica que no existió en realidad la convivencia para el momento de la muerte, pues en tal hito temporal, se itera el de cujus convivía con la señora Yancelly Villa y no con la señora María Patricia Osorio, más aun teniendo en cuenta que en el proceso que da lugar a la mencionada decisión, no se vinculó a la hoy demandante ni intervino el Fondo accionado, por lo que no se tuvo la oportunidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por la señora María Patricia Osorio.

Finalmente, en cuanto a la solicitud presentada por el fondo demandado, consistente en que se acreciente la mesada a los hijos del causante, debe

indicarse que ello no fue objeto de discusión en este proceso, y que el acrecimiento opera por ministerio de la ley, debiendo la AFP, una vez ejecutoriada la decisión proceder a reajustar las mesadas a los mismos, teniendo en cuenta el 50% de la prestación que estaba suspendido.

Colofón de lo anterior, deberá revocarse la sentencia de primera instancia, al considerarse que la señora María Patricia Osorio Morales no logró acreditar una convivencia con el causante, en los 5 años anteriores a su fallecimiento.

Sin costas en esta instancia, las de primera instancia corren por cuenta de la demandante y la interviniente ad excludendum y a favor de la AFP demandada, las cuales deberán ser tasadas por el a quo.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1.- Se **REVOCA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de febrero de 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora MARÍA YANCELLY VILLA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., proceso al cual fue vinculada como interviniente ad excludendum la señora MARÍA PATRICIA OSORIO MORALES, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones instauradas en su contra por la demandante y por la interviniente ad excludendum.

2.- Sin costas en esta instancia, las de primera instancia corren por cuenta de la demandante y de la interviniente ad excludendum y a favor de la AFP demandada, las cuales deberán ser tasadas por el a quo.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES
Salvó voto


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SALVAMENTO DE VOTO

Medellín, nueve (9) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora **MARÍA YANCELLY VILLA** en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, proceso al cual fue vinculada como interviniente ad excludendum a la señora **MARÍA PATRICIA OSORIO MORALES**, respetuosamente manifiesto a los demás integrantes de esta Sala que no acojo el proyecto presentado por el ponente, por las siguientes razones:

Con el respeto debido, no comparto el proyecto, por las siguientes razones:

1.-Estoy de acuerdo con la parte del proyecto que sostiene que el juez singular o plural al resolver el presente asunto, debe acudir a las pruebas allegadas al presente proceso, incluso a las trasladadas.

2. En el proyecto se acude como debe ser a lo reglado en el art. 61 en lo relacionado con el principio de la Sana Crítica, pero, en el análisis de la prueba recaudada, en el proyecto se acude a la tesis Sana crítica y lógica, para no darle a la prueba testimonial el crédito necesario argumentando:

i) que no se le da credibilidad a la testigo porque, “no resulta creíble que una vecina, pueda dar fe que lo que hacía diariamente el causante, durante dieciséis años”

ii) como tampoco el hecho de que el señor Fredy Alejandro Guzmán, viera el carro del causante, parqueado afuera de la casa en la que vivía la señora María Patricia Osorio Morales, es prueba inequívoca de la convivencia.

iii) siendo ambos testigos externos al núcleo familiar.

Como se puede observar, la primera consideración no radica a mi parecer, con el respeto debido, a un análisis como el anunciado, ya que no cumple con el parámetro de la lógica, porque se hace una inferencia particular sobre un hecho testimoniado, que no constituye obviedad de la cual se puede plantear una proposición básica y que no necesita demostración; lo mismo ocurre en el segundo evento; se parte de apreciaciones que no se comportan dentro de las reglas de la lógica y la experiencia, teniendo como tal las "premisas obtenidas del conocimiento de la regularidad de los sucesos habituales".

Para apoyar lo considerado, me sirvo traer a colación apartes de la SL 2049 de 2018, en cuanto a los ítems a tener en cuenta en un examen del acopio probatorio con base en el principio de la Sana Crítica:

"Ahora bien, el juez al tomar sus decisiones evalúa los elementos probatorios en diferentes momentos procesales: i) cuando verifica la necesidad de los mismos, así como los requisitos formales y legales que deben cumplir, los decreta y los incorpora al proceso; ii) cuando los valora

individualmente y en conjunto, es decir, desentraña la información que ellos contienen, los aprecia materialmente, y iii) cuando fabrica la premisa fáctica que debe corresponder a los hechos en que se fundan las pretensiones, esto es, cuando el juzgador elabora las conclusiones que le servirán de fundamento para su decisión.

*Precisamente, **en ese segundo momento valorativo** es cuando la ley le impone al juzgador la obligación de apreciar razonadamente los elementos de convicción «de acuerdo con las reglas de la sana crítica», como parámetro de evaluación racional de aquellos. Dicho postulado apunta a varios conceptos que lo integran -a los que estará sujeto el juez en su actividad valorativa conforme los hechos que interesen a cada proceso-, que se condensan en:*

*(i) Las **reglas de la lógica**: necesarias para elaborar argumentos probatorios de tipo deductivo, inductivo, o abductivo, como los axiomas -entendidos como **aquellas proposiciones básicas que por resultar obvias se pueden afirmar sin demostración**- y las reglas de inferencia -o principios lógicos que justifican la obtención de verdades a partir de otras verdades-.*

*(ii) Las **máximas de la experiencia**: que hacen referencia a; es decir, de lo que generalmente ocurre en un contexto determinado.*

(iii) Los conceptos científicos afianzados: consistentes en las teorías, hipótesis o explicaciones formuladas por la comunidad científica o ilustrada sobre cierto tema y respaldadas por la evidencia de sus investigaciones o experimentos.

(iv) Los procedimientos, protocolos, guías y reglas admitidos por los distintos ámbitos profesionales o técnicos.

Así pues, la sana crítica contribuye al juez a interpretar la información contenida en los medios de prueba legal y oportunamente allegados al proceso.

No obstante, la facultad de apreciar los medios de convicción según las reglas que integran tal principio, no sirve de excusa para que el juez dé la apariencia de racionalidad y juridicidad a sus intuiciones, posturas ideológicas, emociones o prejuicios y, en esa dirección, omitir la lógica que impone la ley para establecer la correspondencia que debe existir entre sus enunciados fácticos y la realidad que dio origen al litigio.

*Dicho de otro modo, la elaboración de las hipótesis sobre los hechos en discusión **deberá fundarse en reglas claras y concretas que le otorguen efectividad a la decisión del sentenciador**, en cumplimiento de su obligación de motivar razonadamente las providencias conforme la garantía constitucional que les asiste a las partes.”*

Por lo tanto, considero pertinente el estudio in extenso de cada uno de los testimonios examinados, porque de lo que obra en el proyecto, se puede inferir del dicho testimonial, que en cuanto a la convivencia no existe contradicción y se refieren al hecho objeto de prueba dentro de este proceso; por lo cual debe estudiarse individualmente y en conjunto, más aún, cuando en relación a los extremos de la convivencia tienden a coincidir con la sentencia de familia aludida en el proyecto.

Con el respeto debido, dejó argumentado mi salvamento de voto.



JULIO RAFAEL TODECILLA PAYARES
MAGISTRADO